

ARTÍCULO CIENTÍFICO
CIENCIAS SOCIALES

La aplicación del procedimiento abreviado en la audiencia de calificación de flagrancia y la vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia

Application of abbreviated procedure in the audience of fragrance rating and the violation of the constitutional right of innocence's presumption

Colcha Ramos, Laura Alicia¹

¹ ur.lauracolcha@uniandes.edu.ec, carrera de Derecho, Universidad Regional Autónoma de los Andes, sede Riobamba, Riobamba, Ecuador.

Recibido: 01/09/2020

Aprobado: 02/10/2020

RESUMEN

El procedimiento abreviado deja de lado algunos de los derechos básicos del acusado, uno de los más importantes es el derecho a la complacencia. Lo que nos lleva a la pregunta de si el acusado, más allá del silencio, tiene el derecho de decidir sobre todas las actividades inculpativas, y esto en sí mismo es la base del procedimiento abreviado. La doctrina sostiene que el acusado debe realizar las actividades preparatorias y de acompañamiento necesarias, lo que significa que la obligación de tolerar incluye los preparativos para la implementación de la acción que nos permite afirmar lo anterior, debe cuestionarse, si esto es cierto, solo se aplica a los delitos punibles con pena de prisión de hasta diez años, lo cual es muy grave, ya que la sentencia de esa escala no puede ser tratada ya que la luz es necesaria para obtener una investigación confiable, por lo tanto, es cierto que las autoridades responsables de llevar a cabo el proceso penal deben recopilar los elementos necesarios para deducir la multa, y no confiar únicamente en el consentimiento de la persona que está siendo procesada para aceptar el hecho, porque no se sabe por qué acepta este hecho.

PALABRAS CLAVE: Procedimiento abreviado; proceso penal; Código Integral Penal.

ABSTRACT

The summary proceedings disregards some of the basic rights of the defendant, one of the most important is the right of complacency. Which brings us to the question of whether the defendant, beyond silence, has the right to decide about all incriminating activities, and itself is the basis of the summary proceedings. The doctrine holds that the defendant must perform the preparatory and accompanying necessary activities, which means that the obligation to tolerate includes preparations for the implementation of the action that allows us to affirm the above, should be questioned, if this is true, it only applies to punishable crimes by imprisonment of up to ten years, which is very serious, since the judgment on that scale cannot be dealt with as light is necessary to obtain a reliable investigation, it is therefore true that the responsible authorities for carrying out the criminal proceedings must gather the necessary elements to deduct the fine, and not rely solely on the consent of the person being processed to accept the fact, because it is not known why he accepts this fact.

KEYWORDS: Summary proceedings; criminal proceedings; Comprehensive Organic Criminal Code.

INTRODUCCIÓN

El Código Orgánico Integral Penal es un cuerpo legal que tiene algunas novedades entre ellas la institución jurídica del procedimiento abreviado que se halla en el Art. 635, y que es el eje central de este trabajo de investigación jurídica, se desenvuelve en el ámbito del Derecho Procesal Penal, el mismo que es de gran importancia para nuestro país El objetivo general de la investigación fue determinar que dentro de este procedimiento, se estaría vulnerando el principio de inocencia, que se encuentra consagrado en nuestra Constitución de la República, pues al someterse una persona procesada a este procedimiento en un tiempo temprano del proceso, en la audiencia de Flagrancia y Formulación de cargos, no existiría la certeza de que dentro de la carga de la prueba existente hasta ese momento, se pruebe la existencia material de la infracción como también la participación de la persona procesada.

En este caso para que exista la flagrancia, se deberá verificar la existencia de los siguientes requisitos: la inmediatez temporal; la inmediatez personal; y, la necesidad urgente, por lo que al verificarse el hecho por los agentes de policía o cualquier persona, estos podrán actuar y aprehender al presunto infractor y ponerlo a órdenes de la autoridad competente para que inicie la fase preliminar del procedimiento y se legalice la aprehensión, la que deberá realizarse dentro de las veinte y cuatro horas, la razón es simplemente porque se trata de derechos fundamentales del ser humano (libertad personal) ampliamente reconocidos en la Constitución de la República y su inobservancia esta sancionada por la ley. Establecer la

legalidad de la aprehensión en la flagrancia, es de vital importancia, puesto que se trata de derechos fundamentales garantizados en la Constitución, y el Juez como garante de estos derechos es quien debe verificar que la persona aprehendida no haya sido privada de la libertad de forma ilegal, ilegítima o arbitraria respetando así el derecho a la libertad personal y principio de inocencia, pero ¿cómo verifica el Juez la legalidad de la aprehensión?, es una pregunta que generalmente vendrá a nuestra mente, si bien es cierto no se encuentra escrito en la ley las reglas, sin embargo en la práctica, al ser una audiencia oral y de conformidad con el principio de inmediación el Juez podrá preguntar directamente al aprehendido si durante la privación de su libertad ha sido informado de sus derechos y si no ha recibido tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la aprehensión.

El procedimiento abreviado se basa en el concepto de rentabilidad social, basado en un intento de justificar, desde un punto de vista económico, la reforma de propósito social del procedimiento penal, enfatizando el resultado en una mejor relación entre costos y beneficios al nivel de cobertura óptimo en el sistema, por lo que se destaca como beneficios: ahorro de los recursos del sistema judicial ; ahorrar los recursos de la víctima en función del tiempo y el dinero; y ahorros del acusado en términos de dinero, tiempo de detención preventiva, duración de la sentencia y gastos de defensa. (Villagomez, 2008)

“Demuestra que el principio de proporcionalidad entre un delito y una pena y un castigo justos como resultado de un veredicto de culpabilidad en el que se demuestra que la oficina del fiscal cae en el propósito utilitario de la carga de trabajo de los jueces, la renuncia a los derechos de defensa, que están enredados en ofertas o promesas de rendición de la voluntad del fiscal, y, por lo tanto, las salvaguardas impuestas a los estados para probar un delito y culpar a la persona se encuentran constitucionalmente en una situación legal de inocencia”. (Zavala, s. f.,)

MÉTODOS

La presente investigación sobre la aplicación del procedimiento abreviado en nuestro país se utilizó el método cualitativo por cuanto suscitó muchas dudas y temores en la ciudadanía, así como en los estudiosos jurídicos, en cuanto a la posible oposición a la presunción de inocencia de los procesados. Entender que estar en un proceso penal como acusado no es de ninguna manera una condición de culpabilidad temprana, porque la Constitución garantiza el derecho a la inocencia hasta la condena, a través de la culpabilidad basada en la evidencia y obligada con un respeto ilimitado al juicio apropiado. En este sentido, tiene como objetivo examinar si la norma procesal contenida en el Código Orgánico Integral Penal, que permite el uso de un procedimiento abreviado, se centra en el cumplimiento de los principios de velocidad y economía de conducta y, por lo tanto, en la resolución rápida y conveniente de los casos. Enfocado desde otro punto de vista, incitando al demandado a tomar ventaja de este

procedimiento, aceptando de antemano el hecho fáctico, infringe de alguna manera su derecho a la presunción de inocencia.

RESULTADOS

Fundamentar desde el punto de vista jurídico sobre la presunción de inocencia frente a la aplicación del procedimiento abreviado, en base a la Constitución de la República del Ecuador, los tratados internacionales, la Ley; la ley, la doctrina y la jurisprudencia esto es extremadamente importante porque la característica principal del principio de confrontación reside en que este juicio no puede existir sin tarifas, que por supuesto trae implícitamente, suposición? No un fiscal. ¿Puedes juzgar esto? La fiscalía pertenece al estado. Para ello, está representado por la fiscalía. Básicamente tiene un monopolio sobre la acusación; La única excepción son los casos de acciones privadas.

El cumplimiento, además está equipado en el artículo 410 del Código Orgánico Integral Penal, también determina que debe llevar a cabo procedimientos penales públicos cuando tenga pruebas suficientes. Es decir, para llevar a cabo la imputación, ya debe contar con los elementos necesarios: Un acto u omisión que daña mantener como una prohibición o mandato legal dado a un acusado que, según el interrogador, conduce a consecuencias legales penales, porque contiene todos los elementos, según el derecho penal, punibles.

Esto es importante porque para obtener estos elementos, realice las investigaciones necesarias y descubra los eventos que servirán para descubrir la verdad, porque si no realizó la investigación adecuada y se tomó solo lo básico para aprobar una sentencia, la aceptación del hecho dado por el acusado descontextualizó completamente el deber de investigar. Con el fin de realizar una acusación fuerte.

Generando también una violación directa del principio de contradicción, que incluye:

- Imputación, citaciones y derecho a ser oído; es decir, la necesidad de una queja formulada que consiste en una conexión clara, una descripción precisa y detallada de la ofensa, y que la relación es conocida por el acusado, y el acusado debe escuchar y presentar su defensa antes de aprobar la resolución

Esto significa que el tiempo simplemente se juzga sobre la base de la aceptación de un hecho, el principio de confrontación se viola directamente porque garantiza que las pruebas de producción se realicen bajo el control de todos los sujetos procesales, para que tengan el derecho de participar en dicha producción, haciendo preguntas. Comentarios, reservas, explicaciones y evaluaciones, ambas pruebas están en el otro.

También garantizando que cada parte pueda, en cualquier momento, escuchar o rechazar los argumentos de alto perfil de la parte contraria, y el derecho a presentar evidencia para justificar su teoría de casos y la parte contraria de la misma manera tiene el derecho a su controversia,

de modo que el principio Las contradicciones se basan en la plena igualdad de las partes para su atribución procesal.

Por lo tanto, para juzgar, es sin duda la presencia de una investigación que puede ser refutada, y el hecho de que aparentemente suceda en un modo ad hoc o, al menos, deje que sea considerado por cualquier lector que conozca los hallazgos, cumpla o no con este presupuesto.

Debe enfatizar que el fiscal tiene la responsabilidad de desarrollar, verificar los hechos y no puede en modo alguno, a fin de procesarlo, y solicitar una multa por el mero hecho de la adopción por la ley referida al procesamiento, además, la acusación debe sustentar, en cualquier caso. que la declaración de cometer un acto es verdadera, por lo que no lo exime de ninguna manera, se debe proporcionar evidencia en apoyo de esta afirmación de que la base de todas las acusaciones se basa en elementos que lo permiten.

4.- Garantía de falta de autoacusación:

La razón de la garantía de independencia es Liliana Campos Aspajo y Rosa Karina Salas Pachas en:

La justificación de la garantía contra la autoincriminación contiene un trípode que contiene dos elementos históricos, como la dignidad y la búsqueda de la verdad en compañía de un tercero demasiado importante, ¿no significa que el derecho a la defensa y la presunción de inocencia Mientras tanto, para (Cabrera, 2010), siguiendo la misma línea, afirma que:

El principio de no discriminación está ampliamente reconocido en las declaraciones internacionales de derechos humanos. Esto se encuentra en el Artículo 14.3g del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el derecho de toda persona que no puede ser obligada a declarar contra sí misma o a declararse culpable. Esta ley tiene tres dimensiones.

- i) el derecho a no aceptar un juramento al declarar;
- ii) el derecho a guardar silencio, y
- iii) el derecho a no ser utilizado como fuente de evidencia incriminatoria contra uno mismo?

Por otro lado, "En asuntos penales, el acusado no puede ser obligado a hacer una declaración bajo juramento en su propio nombre"

Esto es básicamente un concepto, está claro que usted está buscando proteger al acusado de la necesidad de adjudicar el cargo de que él caerá sobre ella, por lo que una garantía contra la autoincriminación sobre la base de las dimensiones anteriores, se dice que violó en el procedimiento abreviado, en el caso convicción, a través de una declaración que se usa como una prueba agravante y final de cometer un acto, evitando así que continúe profundizando en la búsqueda de la verdad, porque esta declaración se configura como una

verdad absoluta, y la sentencia correspondiente se emite con la mitigación de la rendición este procedimiento.

Al realizar el análisis del Procedimiento Abreviado, traemos a colación lo que indica⁵, en este tipo de procedimiento *“existe un consenso entre el Fiscal y el procesado, mediante el cual éste último asume los hechos fácticos de la acusación, a cambio de lo cual el representante de la Fiscalía mociona una pena mínima como sanción.”* (Murillo, 2013).

Partiendo de este concepto, podemos determinar, que lo que se busca con este procedimiento es concluir el proceso penal de la manera más rápida, concentrando todas las etapas del proceso penal, a una audiencia en la cual, los elementos de convicción sobre la existencia del delito como los elementos convicción de que el procesado es autor o cómplice de la infracción, se convierten en pruebas al ser sometidos a la valoración judicial, pues no basta que el procesado admita el hecho que se atribuye, ya que el Juez debe verificar que no se vulnere derechos del afectado.

Entendido, brevemente, la contextualización del procedimiento abreviado es necesario que lo analicemos sus reglas establecidas de la siguiente manera

“Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años son susceptibles de procedimiento abreviado. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por la o el fiscal.” (Zapata, 2016)

De estas reglas, queda claro, que el procedimiento abreviado, busca reducir, tiempo, costas procesales aparentemente, pero si lo analizamos desde el garantismo penal, podemos señalar que el derecho penal tiende a la reducción máxima de la violencia del poder punitivo, es decir, el mínimo de aflicción en su ejercicio, objetivo que en el proceso penal está dirigido a la parte más débil, el procesado, mediante la implementación de idóneas garantías penales y procesales penales, ya que sólo así se configura un modelo normativo de derecho penal mínimo, en el que el poder está limitado y vinculado por los derechos, mediante obligaciones de no hacer y hacer, respectivamente.

Denotando, que evidentemente el procedimiento abreviado, pretende obtener sentencias de modo rápido y económico, coadyuvando a la eficacia del sistema, ya que sólo permite que los juicios más graves y que mayor conmoción social causan, sean los que en definitiva necesitan y deban probarse, obteniendo de esta manera ahorro de recursos y tiempo, visualizando como

si el sistema penal, solo se basará en un cálculo presupuestario destinado sólo a un cierto porcentaje de casos que deban ser investigados mediante el procedimiento ordinario.

Tomando, como justificativo, la aceptación del procesado de los hechos fácticos, que le permite al fiscal obtenga una ventaja al “no tener que producir prueba en un juicio oral, validándose los antecedentes que ha recopilado en la fase investigativa y aceptándose el hecho presentado por él.

El Artículo 11 de la Constitución de la República, es el derecho de las partes a presentar a los jueces órdenes que consideren legales, que los jueces deben prontamente tomar parte en esto y resolver que, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 637 del COIP, debemos insistir en que Ecuador sea un estado constitucional de ley y justicia, lo que sugiere que debemos aplicar la ley a la luz de los derechos y principios constitucionales, porque esta es la característica principal de la nueva Constitución. Significa que el juez tendrá que vigilar las reglas de la víctima y del acusado cuando se resuelva el procedimiento abreviado, porque eso solo no es suficiente la aceptación del hecho de que la oficina del fiscal real reclama como garante, será el valor de la evidencia que Consten procesa y está convencida de que la evidencia es suficiente, y que debe tomarse como evidencia, no viola los principios constitucionales, sobre la investigación, el juez debe asegurarse que se ha demostrado que la garantía retenida es una condición sujeta a fiscalización.

DISCUSIÓN

Al realizar el análisis del Procedimiento Abreviado, traemos a colación lo que indica, en este tipo de procedimiento “existe un consenso entre el Fiscal y el procesado, mediante el cual éste último asume los hechos fácticos de la acusación, a cambio de lo cual el representante de la Fiscalía mociona una pena mínima como sanción.” (Murillo, 2013).

Partiendo de este concepto, podemos determinar, que lo que se busca con este procedimiento es concluir el proceso penal de la manera más rápida, concentrando todas las etapas del proceso penal, a una audiencia en la cual, los elementos de convicción sobre la existencia del delito como los elementos convicción de que el procesado en autor o cómplice de la infracción, se convierten en pruebas al ser sometidos a la valoración judicial, pues no basta que el procesado admita el hecho que se atribuye, ya que el Juez debe verificar que no se vulnere derechos del afectado.

Entendido, brevemente, la contextualización del procedimiento abreviado es necesario que lo analicemos sus reglas establecidas de la siguiente manera.

“Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria

de juicio. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por la o el fiscal.” (Zapata, 2016)

De estas reglas, queda claro, que el procedimiento abreviado, busca reducir, tiempo, costas procesales aparentemente, pero si lo analizamos desde el garantismo penal, podemos señalar que el derecho penal tiende a la reducción máxima de la violencia del poder punitivo, es decir, el mínimo de aflicción en su ejercicio, objetivo que en el proceso penal está dirigido a la parte más débil, el procesado, mediante la implementación de idóneas garantías penales y procesales penales, ya que sólo así se configura un modelo normativo de derecho penal mínimo, en el que el poder está limitado y vinculado por los derechos, mediante obligaciones de no hacer y hacer, respectivamente.

Denotando, que evidentemente el procedimiento abreviado, pretende obtener sentencias de modo rápido y económico, coadyuvando a la eficacia del sistema, ya que sólo permite que los juicios más graves y que mayor conmoción social causan, sean los que en definitiva necesitan y deban probarse, obteniendo de esta manera ahorro de recursos y tiempo, visualizando como si el sistema penal, solo se basará en un cálculo presupuestario destinado sólo a un cierto porcentaje de casos que deban ser investigados mediante el procedimiento ordinario.

Tomando, como justificativo, la aceptación del procesado de los hechos fácticos, que le permite al fiscal obtenga una ventaja al “no tener que producir prueba en un juicio oral, validándose los antecedentes que ha recopilado en la fase investigativa y aceptándose el hecho presentado por él.

En este contexto la Jueza o Juez de Garantías Penales requiere que haya un acuerdo entre el procesado y la Fiscal o fiscal, que se trate de un delito que tenga una pena prevista no superior a diez años y el procesado admita el someterse a esta procedimiento y acepte la pena negociada, esta herramienta cumple con los principios de mínima intervención penal y celeridad establecidos en la Constitución, pues se ahorran diligencias, con la oportuna aplicación de este procedimiento la carga procesal baja considerablemente aparte de que se consigue la optimización, tanto en tiempo como en recursos que se invierten en un proceso normal en relación al Procedimiento Abreviado sostiene: “La praxis jurídica conduce a la comprobación de que la consumación del trámite procesal resulta, en los hechos, casi siempre tardía para resolver eficazmente el proceso penal sometido a la decisión del ente judicial, y esto sucede más allá de los topes temporales fijados normativamente ya sea en la Constitución de la República, Tratados Internacionales y Código de Procedimiento Penal.

Para superar esta tardanza los ordenamientos procesales han tendido a abreviar los procedimientos para definir anticipadamente el caso penal en juzgamiento (Narváez, 2013). La doctrina sostiene que: en resumen, el proceso es el procedimiento abreviado por la ley procesal, es legal y válido para dictar una condena. Es un contrato entre: un representante del Fiscal General, el acusado y su abogado (público o privado). El fiscal acusa el hecho y luego califica (confirma el tipo de delito) y ofrece castigo. Por su parte, el acusado reconoce su participación, asume la culpa y acepta o negocia el castigo. Debe celebrar un contrato que llegue a la audiencia con el juez en un caso que se notifique y debe imponer una sentencia; Considerado como una garantía de cumplimiento de la ley, Constitución y Cánones Internacionales de Derechos Humanos reconocidos por el Ecuador; Esto significa que la garantía tiene como objetivo establecer técnicas de garantías apropiadas y garantizar el máximo nivel de efectividad de los derechos reconocidos constitucionalmente. "En ese momento, estamos ante una nueva forma de justicia, contenido significativo y validez de la ley, legalismo justo y la fuerza del formalismo en el derecho nacional secundario. , lo que lleva a los operadores judiciales, no a la obligación de aplicar directamente el estándar más alto a que se refiere el Artículo 426 en relación con el Artículo 11.

El Artículo 11 de la Constitución de la República, es el derecho de las partes a presentar a los jueces órdenes que consideren legales, que los jueces deben prontamente tomar parte en esto y resolver que, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 637 del COIP, debemos insistir en que Ecuador sea un estado constitucional de ley y justicia, lo que sugiere que debemos aplicar la ley a la luz de los derechos y principios constitucionales, porque esta es la característica principal de la nueva Constitución. Significa que el juez tendrá que vigilar las reglas de la víctima y del acusado cuando se resuelva el procedimiento abreviado, porque eso solo no es suficiente la aceptación del hecho de que la oficina del fiscal real reclama como garante, será el valor de la evidencia que Consten procesa y está convencida de que la evidencia es suficiente, y que debe tomarse como evidencia, no viola los principios constitucionales, sobre la investigación, el juez debe asegurarse que se ha demostrado que la garantía retenida es una condición sujeta a fiscalización.

CONCLUSIONES

Cuando se refiere a flagrancia, existe un profundo dilema que nuestra doctrina tiene que resolver y se basa en la identificación de las características que se atribuye a una persona configurada como un comportamiento incompatible con la ley, pero esta cualidad será finalmente determinada solo por una sentencia correctamente aplicada, aplicando el principio de inocencia.

Por esta razón, durante un interrogatorio flagrante, se llega a una discusión sobre la existencia o la falta de observancia basada en el principio de legalidad, por lo que el defensor del acusado pide al juez que aplique el principio de inocencia a favor del acusado, en este caso la oficina del fiscal tiene que demostrar la existencia de flagrancia

Esta investigación analizará el aspecto procesal de la flagrancia para determinar si los derechos como la inocencia y la libertad están limitados por aprehensión ilegal o arbitraria. Este enfoque permite, por un lado, explicar cuál es la escala de calificaciones y cómo afecta el principio de inocencia, y por otro lado, cómo el acusado puede preservar su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, es necesario abordar las nociones de presunción de inocencia, el juicio adecuado y la colisión de derechos

REFERENCIAS

- Cabrera. (2010). Principios constitucionales. En L. Cabrera.
- Cornejo. (2016). «EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL COIP», . En José Sebastián Cornejo Aguilar. Quito, Ecuador: Derecho Ecuador, .
- Grisolia. (2012). Manual de Derecho Laboral. Buenos Aires. En J. Grisolia. Buenos Aires., Ecuador.
- Huenchuan, S. (2015). *“Los Derechos de las Personas Mayores”*. Impreso en Naciones Unidas.: Santiago de Chile.
- Manrique. (2013). “Derecho del trabajo y la seguridad Social”. Primera Edición. . En A. Manrique. México: Venecia. .
- Morales. (2008). Manual de Derecho Romano, Historia e Instituciones. En J. Morales. Buenos Aires, Argentina: Editorial Telmis.
- Murillo. (2013). “Juicio abreviado y suspensión de juicio a prueba” . En J. Murillo. Bogotá: Selare Ediciones.
- Narváez. (2013). Procedimiento Penal Abreviado. . En M. NARVÁEZ. (Quito: Librería Jurídica Cevallos.
- Narváez. (2003). El procedimiento abreviado. En N. Marcelo. Quito: Cevallos Libreria Juridica.
- Omeba. (2011). Enciclopedia Legal de Omeba. En E. L. Omeba. Quito, Ecuador: edición Omega.
- Peña. (2013). Curso elemental de derecho penal. En a. Peña cabrera freyre, & e. S. Galván (Ed.). Perú: Ediciones legales E.I.R.L.
- Villagomez. (2008). «El rol del fiscal en el procedimiento penal abreviado». En Richard Villagomez Cabezas. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador.
- Villagomez. (2016). «El rol del fiscal en el procedimiento penal abreviado».,p.32. En R. V. Cabezas. editores. Corporación Editora Nacional.

- Zapata. (2016). "El cinturón de seguridad del derecho a guardar silencio/prestar declaración de! detenido: la intervención oportuna y efectiva del defensa. En F. Zapata.
- Zapata. (2015). "El cinturón de seguridad del derecho a guardar silencio/prestar declaración de! detenido: la intervención oportuna y efectiva del defensor, s. f.,p.7. En F. Zapata. Ecuador.
- Zavala. (s. f.,). «El procedimiento abreviado». En Jorge Zavala Baquerizo. Cuenca: http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/procedimiento_abreviado.pdf., p.602.